SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 796

11 de mayo de 2009

Presentado por el señor *Fas Alzamora*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para adicionar el inciso (t) al Artículo 1.2, enmendar el inciso (a) del Artículo 3.2 y adicionar el inciso (d) al Artículo 3.8 de la Ley Número 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a los fines de incluir la definición de convicto en la Ley, establecer que ningún funcionario o empleado público desacatará las leyes u ordenes federales o locales y disponer que cualquier funcionario o empleado público convicto de cometer ciertos delitos será destituido inmediatamente por el Gobernador o autoridad pertinente; enmendar el segundo párrafo del Artículo 3.008 de la Ley Número 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico" a fin de disponer que los alcaldes podrán ser destituidos de resultar convictos de cometer ciertos delitos tanto en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como en la jurisdicción federal o de cualquiera de los estados de los Estados Unidos; y enmendar la Sección 3.3 de la Ley Número 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de prohibir que una persona que sea convicta de cometer ciertos delitos pueda ocupar un puesto en el servicio público.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La confianza pública en el gobierno es la base misma de la democracia. El mal uso de fondos públicos viola y traiciona la esencia de esa confianza pública. La corrupción gubernamental desgasta y desvía los fondos públicos asignados a atender las necesidades básicas, además de debilitar las herramientas para combatir la injusticia social.

Los servidores públicos, ya sean éstos electos o no, son los responsables de la administración gubernamental y la misma debe estar dirigida a lograr el bienestar general del pueblo. Unido a esta responsabilidad se encuentra el deber de todo servidor público de

comportarse de tal forma que la ciudadanía continúe confiando en la habilidad de éstos para administrar sabia y responsablemente las funciones del Gobierno.

En 1975 se aprobó la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico. El propósito de esta Ley es lograr que la administración pública se rija por criterios de uniformidad, equidad y justicia. Al ser enmendada en 1979, se incluyeron en la misma condiciones que hacen inelegible a una persona para ocupar puestos públicos, especialmente cuando han sido convictos de algunos delitos.

Con el propósito de garantizar el respeto al derecho y la obediencia de la ley, misión fundamentalmente especial cuando se trata de funcionarios públicos, y para restaurar la confianza del pueblo en su gobierno, en 1985 se aprobó la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico. La misma tiene como propósito prevenir y penalizar el comportamiento delictivo de aquellos funcionarios que vulneran los principios básicos de ética, especialmente cuando se lucran del patrimonio del pueblo.

Con la aprobación de las leyes antes mencionadas, tanto la Rama Ejecutiva como la Legislativa están regidas por un código de conducta ética. Más tarde, en 1991, con la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos, los alcaldes también fueron sometidos a las mismas exigencias de conducta.

El aumento en arrestos, acusaciones y convicciones de oficiales del servicio público está sacudiendo la confianza pública en todas las instituciones del Estado. Esta situación empeora cuando funcionarios electos resultan convictos en otras jurisdicciones, como el Tribunal Federal e inclusive en cualquiera de los estados de los Estados Unidos, pero continúan ocupando sus puestos ya que nuestro estado de derecho vigente no dispone para su suspensión o remoción de ocurrir esta convicción. Permitir que personas que han resultado convictas en otras jurisdicciones continúen en el servicio público no sólo lacera la confianza del Pueblo en el buen funcionamiento de las instituciones del Estado sino que dificulta el funcionamiento del Gobierno.

La administración pública tiene que retomar el carácter de honradez que un día le caracterizó. Los servidores públicos tienen que aceptar su responsabilidad de administrar con limpieza total y de ejercer completa prudencia y juicio sobre la confianza que se les ha sido depositada. Continuando nuestra lucha contra la corrupción, y como mecanismo para facilitar la

remoción de aquellos servidores públicos que han violentado la confianza del pueblo, esta Asamblea Legislativa considera necesaria la aprobación de esta medida.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Se adiciona el inciso (t) al Artículo 1.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de
2 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:

3 "Artículo 1.2- Definiciones

4 Para propósitos de esta Ley, las palabras o frases que a continuación se enumeran tendrán
5 el significado que aquí se indica, a menos que del contexto surja claramente otro significado:

6 (a)...

7 (t) *Convicto- significa aquella persona a quien legalmente se le ha probado un delito y*
8 *contra quien ha recaído un veredicto de culpabilidad."*

9 Artículo 2.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio
10 de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:

11 "Artículo 3.2- Prohibiciones Éticas de Carácter General

12 (a) Ningún funcionario o empleado público desacatará, ya sea personalmente o actuando
13 como servidor público, las leyes en vigor *del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni*
14 *las de los Estados Unidos de América*, ni las citaciones u órdenes de los Tribunales de
15 Justicia *locales o federales*, de la Rama Legislativa o de las agencias de la Rama
16 Ejecutiva que tengan autoridad para ello."

17 Artículo 3.- Se adiciona el inciso (d) al Artículo 3.8 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de
18 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:

19 "Artículo 3.8- Sanciones y remedios

20 (a) ...

1 (d) *No obstante lo establecido en los incisos (a), (b), (c) de este Artículo, cualquier*
2 *funcionario o empleado público, convicto de cometer un delito grave, delito menos*
3 *grave que implique depravación moral, incurrir en conducta inmoral o incurrir en*
4 *actos ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a*
5 *los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones, ya sea en la*
6 *jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la jurisdicción Federal o en*
7 *cualquiera de los estados de los Estados Unidos de América, será destituido*
8 *inmediatamente de su cargo, por el Gobernador o autoridad pertinente."*

9 Artículo 4.- Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 3.008 de la Ley Núm. 81 de 30
10 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue:

11 "Artículo 3.008- Destitución del Alcalde.-

12 En el desempeño de su cargo los Alcaldes estarán sujetos al cumplimiento de las normas
13 de conducta y ética establecidas en la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada,
14 conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

15 El alcalde podrá ser destituido de su cargo de conformidad al procedimiento dispuesto en
16 esta ley y por **[las siguientes causas]** *resultar convicto, ya sea en la jurisdicción del Estado*
17 *Libre Asociado de Puerto Rico, la jurisdicción Federal o en cualquiera de los estados de los*
18 *Estados Unidos de América, por:*

19 **[(a) Haber sido convicto de un delito grave.**

20 **(b) Haber sido convicto de delito menos grave que implique depravación moral.]**

21 (a) *Delito grave.*

22 (b) *Delito menos grave que implique depravación moral.*

23 (c) *Incurrir en conducta inmoral.*

1 (d) Incurrir en actos ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta
2 lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones.

3 El Gobernador de Puerto Rico, el Director de la Oficina de Etica Gubernamental, la
4 Asamblea o cualquier persona, podrán presentar cargos contra el Alcalde ante la Comisión
5 para Ventilar Querellas Municipales."

6 Artículo 5.- Se enmienda la Sección 3.3 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975,
7 según enmendada, para que se lea como sigue:

8 "Sección 3.3.- Funciones de la Oficina y del Director.-

9 La Oficina tendrá las siguientes funciones:

10 (1)...

11 (4) Habilitar para ocupar puestos públicos a personas inelegibles para el ingreso al
12 servicio público, por haber incurrido en conducta deshonrosa, o haber sido adicto al uso
13 habitual y excesivo de sustancias controladas o bebidas alcohólicas, o haber sido convictas
14 por delito grave o por cualquier delito que implique depravación moral, o haber sido
15 destituidas del servicio público, sujeto a las normas que se establezcan por reglamento. La
16 aprobación de este reglamento estará sujeta a los requisitos y procedimientos en el inciso (1)
17 de esta subsección.

18 Para el cumplimiento de esta función podrá solicitar la colaboración de cualquier
19 organismo gubernamental que a su juicio tenga los recursos adecuados para hacer las
20 evaluaciones pertinentes. Tanto el Director como la Oficina realizarán todas aquellas
21 funciones que le fueran asignadas por leyes especiales al Director y a la Oficina Central de
22 Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que no hayan sido

1 derogadas por este capítulo. Asimismo, realizarán las funciones específicas asignadas y todas
2 aquellas funciones necesarias o convenientes para lograr los propósitos de esta Ley.

3 No obstante lo dispuesto anteriormente, se considerará como inelegible para ingresar o
4 reingresar al servicio público o permanecer en él y no podrá ser habilitada para ocupar
5 puestos públicos, **[por el término de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de la**
6 **convicción,]** toda persona que haya sido convicta en la jurisdicción del Estado Libre
7 Asociado de Puerto Rico, en la jurisdicción Federal o en cualquiera de los estados de los
8 Estados Unidos de América, **[por cualesquiera de los delitos siguientes, cuando**
9 **constituyan delito grave y se hayan cometido en el ejercicio de una función pública,**
10 **según dicha función se define en el Artículo 1 de esta Ley, disponiéndose que en] de**
11 *cometer un delito grave, delito menos grave que implique depravación moral, incurrir en*
12 *conducta inmoral o incurrir en actos ilegales que impliquen abandono, negligencia*
13 *inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus*
14 *funciones. En caso de que una persona resulte convicta por los delitos y en las jurisdicciones*
15 *antes mencionadas o por cualquiera de los delitos menos grave que se enumeran a*
16 *continuación, dicha persona no podrá aspirar u ocupar ningún cargo electivo o puesto en el*
17 *servicio público* **[por el término de ocho (8) años, a partir de la convicción]:**

- 18 1. Apropiación ilegal agravada;
- 19 2. extorsión;
- 20 3. daño agravado;
- 21 4. sabotaje de servicios públicos esenciales;
- 22 5. fraude en las construcciones;
- 23 6. fraude en la entrega de cosas;

- 1 7. enriquecimiento ilícito de funcionario público;
- 2 8. aprovechamiento por funcionario de trabajos o servicios públicos;
- 3 9. negociación incompatible con el ejercicio del cargo público;
- 4 10. intervención indebida en los procesos de contratación de subasta o en las operaciones
- 5 del gobierno;
- 6 11. retención de documentos que deben entregarse al sucesor;
- 7 12. destrucción o mutilación de documentos por funcionarios públicos;
- 8 13. certificaciones falsas expedidas por funcionarios públicos;
- 9 14. archivo de documentos clasificados;
- 10 15. soborno;
- 11 16. soborno (delito agravado);
- 12 17. soborno de testigo;
- 13 18. oferta de soborno;
- 14 19. influencia indebida;
- 15 20. delitos contra fondos públicos;
- 16 21. posesión ilegal de recibos de contribuciones;
- 17 22. compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones;
- 18 23. venta ilegal de bienes;
- 19 24. preparación de escritos falsos;
- 20 25. presentación de escritos falsos;
- 21 26. falsificación de documentos;
- 22 27. posesión y traspaso de documentos falsificados;
- 23 28. falsificación de asientos en registros;

1 29. falsificación de sellos;

2 30. falsificación de licencia, certificado y otra documentación;

3 31. posesión de instrumentos para falsificación.

4 Los delitos antes mencionados están estatuidos en los Artículos 166, 175, 180, 182, 188,
5 189, 200, 201, 202, 202A, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223,
6 241, 242, 271, 272, 273, 274, 275 y 276, respectivamente, **[del] de la Ley Núm. 115 de 22 de**
7 **julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal de Puerto Rico[, según**
8 **enmendado].**

9 (5) La Oficina podrá representar en el área laboral a las agencias de la Rama Ejecutiva
10 que así se lo soliciten, en todo lo que tenga que ver con los procedimientos de elección y
11 certificación de organizaciones sindicales, en cuanto a la negociación y administración de
12 convenios colectivos y en todas aquellas áreas relacionadas con los asuntos laborales de la
13 agencia. En el descargo de las funciones de asesoramiento en torno a la negociación
14 colectiva, la Oficina coordinará y supervisará la creación y funcionamiento de un Comité de
15 Negociación compuesto por su personal y aquéllos que designe la Oficina de Gerencia y
16 Presupuesto. La Oficina realizará estudios comparativos de convenios colectivos y ofrecerá
17 adiestramientos en el área laboral a aquellas agencias que se lo soliciten.

18 (6) La Oficina llevará a cabo la realización de estudios e investigaciones dirigidos a
19 ofrecer asesoramiento a las agencias, de modo que los supervisores y el personal directivo de
20 las mismas estén preparados y adiestrados para trabajar en un ambiente donde los
21 trabajadores estén organizados en sindicatos. "

22 Artículo 6.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.